

Abandonan la huelga de hambre los etarras entregados por Uruguay

HB condena la expulsión de Idigoras y de Rosario Delgado del país sudamericano

R. HERRERO COLPISA, MADRID

Los tres etarras extraditados por Uruguay el pasado jueves presentan un estado sanitario general calificado como «bueno», y se encuentran «dentro de la más absoluta normalidad», según el informe médico emitido por los facultativos que les atienden en el hospital general penitenciario de Carabanchel, en Madrid. Nada más ingresar en el centro sanitario, Luis María Lizarralde, Jesús María Goitia y Miguel Ibáñez abandonaron la huelga de hambre y sed que mantenían y aceptaron voluntariamente comenzar a ingerir alimentos y líquidos, tanto por vía oral como intravenosa.

El juez Carlos Bueren decretó el ingreso en prisión comunicada de los tres terroristas, quienes fueron visitados ayer por la tarde por sus familiares. Este magistrado o alguno de los restantes titulares de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional —ya que en todos ellos tienen diligencias pendientes— les citarán a declarar con toda probabilidad a lo largo de la próxima semana. Fuentes judiciales no descartaron, incluso, que algún juez les interrogue el lunes o el martes, toda vez que su situación médica se ha normalizado.

Coincidiendo con la llegada a España de los etarras, las autoridades uruguayas comunicaron al portavoz de HB Jon Idigoras su expulsión del país, donde se trasladó para realizar gestiones que impidieran la extradición de los activistas, a los que se les imputa la comisión de varios delitos y asesinatos. La expulsión del diputado radical estuvo motivada por unas polémicas declaraciones en las que acusaba al presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, de cerrar un «pacto ignominioso» con

el Ejecutivo español.

El Gobierno uruguayo estimó «inadmisibles e injuriosas» estas manifestaciones y consideró que, con ellas, el dirigente radical contribuyó a crear clima de violencia en Montevideo, ciudad que vivió una batalla campal el pasado miércoles entre la Policía y manifestantes que protestaban por las entregas. Por similares razones, las autoridades uruguayas ordenaron ayer la expulsión de la presunta etarra Rosario Delgado, a la que otorgaron un plazo de seis horas para abandonar el país.

Los incidentes del miércoles, registrados ante el hospital Filtro, centro donde permanecían ingresados los etarras, se saldaron con dos muertos, un centenar de heridos —algunos de ellos de bala— y una treintena de detenidos.

«Hechos inaceptables»

El parlamentario de la coalición abertzale, acompañado de un funcionario del Gabinete de Lacalle, fue escoltado hasta el aeropuerto y obligado a abandonar el país, al que había entrado como turista. HB condenó ayer la expulsión de Idigoras y de Delgado y calificó de «inaceptables» los hechos que les imputa el Gobierno uruguayo, «cuyo único interés es desviar las verdaderas responsabilidades».

Tras el fallecimiento de dos jóvenes en los altercados, el sindicato PIT-CNT (Convención Nacional de Trabajadores) convocó para ayer una huelga general de 24 horas, que tuvo una incidencia muy importante en Montevideo. En medio de la jornada de paro, dirigentes de todos los partidos políticos uruguayos pidieron calma y reflexión para que no se repitan los incidentes, «los peores desde la reinstauración de la democracia, en 1985».



Los etarras Ostolaza y Delgado, en el funeral celebrado en Montevideo.

«Imagen deformada»

EL CORREO BILBAO

El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, se mostró ayer «sumamente preocupado» por los incidentes registrados en Montevideo por las extradiciones, que calificó de «muy graves». El dirigente nacionalista manifestó que «algún grupo de extrema izquierda ha manipulado y deformado la imagen de lo vasco».

En términos similares se expresó el secretario general del PSE-EE, Ramón Jáuregui, quien señaló que «un grupo radical uruguayo, probablemente cercano a los tupamaros, ha manipulado y movilizado a la gente de una forma muy confusa, pensando que España está en el 36 o en el 70».

Sin embargo, la Coordinadora Abertzale Sozialista (KAS) atribuyó la «solidaridad» del pueblo uruguayo con los etarras repatriados a la ruptura del Gobierno del

país sudamericano «con una larga tradición de asilo político y de respeto a los derechos humanos». Las Gestoras pro Amnistía, que han convocado para hoy, junto a Senideak, una manifestación en San Sebastián en protesta por las entregas, aseguraron «que nos podrán vender la imagen de que los extraditados son sanguinarios, pero sabemos que eso es absolutamente falso».

Respecto a la expulsión de Uruguay del diputado de Herri Batasuna Jon Idigoras, el portavoz del Partido Popular en el País Vasco, Gregorio Ordóñez, señaló ayer que «la mala noticia no es la expulsión de Idigoras, sino que vuelva a España». Sobre los incidentes, el parlamentario popular subrayó que si «una minoría de uruguayos aplaude a asesinos, que se junten con ellos para colonizar la Antártida».

Los análisis de balística identifican al etarra Carmona como el autor de la muerte del ertzaina Goikoetxea

EL CORREO BILBAO

El presunto jefe del comando Vizcaya, José Luis Martín Carmona, Koldo, ha sido identificado como el presunto autor de la muerte del sargento mayor de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, según los informes de balística realizados por los laboratorios del Cuerpo Nacional de Policía.

Los análisis señalan que el arma utilizada el pasado domingo en el asesinato del policía José Santana Ramos —en el que los testigos reconocieron a Martín Carmona— es la misma que se empleó en la muerte del sargento Goikoetxea, por lo que la Policía ha deducido la participación de Koldo en ambos atentados, según aseguró ayer la agencia Vasco Press.

La pistola con la que se hirió de muerte al sargento de la Ertzaintza el 22 de noviembre de

1993 también se empleó contra el guardia civil José Benigno Villalobos, asesinado en la localidad vizcaína de Trapaga el pasado mes de abril.

Coincidencias

Otra de las coincidencias que existe en estas tres muertes es el procedimiento empleado por los miembros de la banda terrorista. Los activistas se han acercado a la víctima por la espalda y le han disparado dos tiros a bocajarro en la cabeza. Joseba Goikoetxea fue tiroteado en Bilbao cuando se encontraba dentro de su vehículo, detenido en un semáforo. El guardia civil Benigno Villalobos recibió dos impactos en la cabeza mientras abandonaba su domicilio para dirigirse al trabajo y el miembro del Cuerpo Nacional de Policía José Santana fue alcanzado por dos balas mientras jugaba a las cartas

en una sede del PNV.

El comando Vizcaya ha cometido un total de cinco asesinatos desde que comenzó a operar en la provincia. Junto a los tres citados, al talde se le asignan la muerte del guardia civil Fernando Pascual, al estallar una bomba bajo su coche, y la del vecino del barrio bilbaíno de Recalde, José Díez Losado, muerto a tiros el pasado día 9. Además, como consencuencia de los atentados de este grupo otras cinco personas han resultado heridas.

Grupos de apoyo

Fuentes policiales mantienen que José Luis Martín Carmona es el jefe del grupo terrorista y cuenta con el apoyo de Jon Bienzobas Arreche, Karraka, y una mujer cuya identidad no está acreditada aunque se sospecha que se trata de Garbiñe Gómez Gorrochategi,

Nikolasa.

La intensa actividad que han desplegado en las últimas semanas hace sospechar a la Policía que cuentan con una fuerte infraestructura en la provincia. Asimismo, se cree que cada uno dispone de un grupo de apoyo. Dos de ellos estarían dedicados a la obtención de información mientras que un tercero se ocuparía de la preparación y colocación de pequeños artefactos explosivos.

José Luis Martín Carmona ya estuvo integrado en uno de estos taldes de apoyo en 1990, aunque pasó a la clandestinidad al ser descubierto por la Policía Municipal de Bilbao cuando robaba un automóvil. En 1991, tras el tiroteo que costó la vida al etarra Tturko y al ertzaina Mentsaka, Koldo huyó a Francia. En 1992 regresó a Vizcaya, donde fue identificado tras robar una furgoneta.

El abogado de Pepe Rei presentó el recurso contra el auto de prisión

EL CORREO BILBAO

El abogado del periodista de Egin Pepe Rei presentó ayer el recurso contra el auto de prisión dictado contra su cliente por el juez de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren. Rei permanece encarcelado desde el miércoles acusado de colaborar con ETA. Su letrado, Alvaro Reizabal, reiteró ayer que la decisión judicial «no se sostiene» y que fue adoptada sin un discurso lógico que la avale. Por ello, ha solicitado la libertad provisional o, en el caso de que se deniegue, la posibilidad de evitar la cárcel mediante el pago de una fianza.

Rei fue internado en el Hospital Penitenciario de Carabanchel —ya que padece una dolencia cardíaca— después de que el juez Carlos Bueren decidiera su ingreso en prisión por haber enviado presuntamente información sobre empresas vascas a Carlos Almorza Pedrito de Andoain, presunto responsable de la red de cobro del impuesto revolucionario de ETA.

Según su abogado, el magistrado de la Audiencia Nacional no ofreció un razonamiento que explique la relación entre Almorza y Rei, director del equipo de investigación de Egin. También añadió que a la documentación que presuntamente envió Rei tenían acceso unas cien personas y que el periodista no conoce a Carlos Almorza ni ha mantenido conversaciones telefónicas con dirigente etarra.

Alvaro Reizabal, que fue condenado por colaborar en la extorsión a empresarios y posteriormente absuelto por el Tribunal Supremo, insistió ayer en su defendido no intentará eludir la acción de la justicia en el caso de que obtenga la libertad provisional. En su opinión, Rei ha realizado una vida normal desde que la Ertzaintza registró, por orden judicial, su despacho en la sede del diario Egin, donde la Policía autónoma encontró los papeles que presuntamente le relacionan con la red de extorsión. Asimismo, el defensor señaló que el estado de salud de su cliente es delicado por su dolencia cardíaca y que necesita una medicación especial.

Apoyo de LAB

Por otro lado, el sindicato LAB denunció ayer el encarcelamiento del periodista y lo calificó de «detención fascista que atenta directamente contra la libertad de expresión y el derecho a la información». Desde LAB se ha acusado al juez Bueren y al consejero de Interior, Juan María Atutxa, de ser «verdugos al servicio de los corruptos».

La central sindical también asegura que Pepe Rei, «con su trabajo de investigación, con su denuncia permanente, con su compromiso profesional, desarrolla un trabajo inmenso a favor de la construcción de una nueva sociedad vasca».